

La Policía detiene en Madrid a un libanés relacionado con los terroristas

Las fuerzas de Seguridad le vinculan a la finca donde se prepararon las bombas y al piso de Leganés en el que se suicidaron los integristas

E. SAN JUAN / M. SÁIZ-PARDO
COLPISA. MADRID

Agentes de la Comisaría General de Información detuvieron el miércoles en el barrio madrileño de Carabanchel al libanés Semaan Gaby Eid, acusado de haber mantenido «estrechos contactos» con cuatro de los terroristas del 11-M que se suicidaron en el piso de Leganés y con otros tres activistas de la célula integrista.

Los servicios de información no descartan que el sospechoso incluso pudiera ser uno de los autores materiales de la masacre ya que se tiene constancia –gracias a las llamadas de su teléfono móvil– de que estuvo en las fechas de los atentados en la casa de Morata de Tajuña donde se confeccionaron los explosivos y en el piso de Leganés en el que se suicidaron siete de los activistas.

En el registro de la vivienda de Gaby Eid la Policía intervino dos teléfonos móviles, contratos de telefonía, fotocopias de documentos marroquíes, una libreta bancaria, agendas manuscritas y



FICHA. Foto policial del detenido en relación con el 11-M, Semaan Gaby Eid. / AFP

diversa documentación.

En el momento de su detención, el libanés, que tiene antecedentes de tráfico de droga y alguna reclamación judicial pendiente, llevaba documentación falsa a nombre de Gabriel Salim Aoun, de nacionalidad portuguesa. La carta de identidad fue emitida en Lisboa el 20 de agosto de 1998. Cuando fue arrestado también llevaba un permiso de cir-

culación y un teléfono móvil.

Según desvelaron fuentes de la lucha antiterrorista, Semaan Gaby Eid se encontraba horas después del atentado en el área de la finca situada en la localidad de Morata de Tajuña. La investigación también ha constatado su presencia en las proximidades de la vivienda que fue ocupada por la célula terrorista entre el 13 de marzo y el 3 de abril en Leganés.

La Policía ha logrado descubrir la vinculación del libanés con el grupo integrista tras escudriñar durante varios meses los registros de llamadas de móviles captadas por las antenas de telefonía de la zona de Morata de Tajuña. Estos datos fueron comparados uno a uno con las decenas de miles de llamadas realizadas en marzo y abril en Leganés hasta dar con el número del árabe arres-

tado el miércoles.

La Policía relaciona al detenido con, al menos, cuatro de los siete terroristas muertos el 3 de abril: Jamal Ahmidan, 'el Chino', los hermanos Rachid y Mohamed Oulad Akhcha y Abdennabi Kounjaa. Todos ellos –explicaron los investigadores– mantuvieron contactos telefónicos «recientes» con el sospechoso detenido en Carabanchel.

Trama narcofinanciera

Los servicios de Información también vinculan –siempre gracias a las llamadas– al libanés con tres miembros de la trama narcofinanciera que sufragó la preparación de los atentados: Abdelillah el Fuad El Akil, detenido el 2 de abril en Ceuta; Hicham Ahmidam, arrestado el 25 de marzo en Marruecos por tráfico de drogas; y Youseff Ahmidam, hermano del anterior.

Asimismo, la Policía cree que Gaby mantuvo contactos «más que esporádicos» con el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, acusado de facilitar a la célula de Serhane Ben Fakhel, 'el Tunecino', los más de 200 kilos de 'gomas' que se utilizaron para atacar contra los trenes de cercanías de Madrid.

La sospecha de los funcionarios es que el libanés arrestado participó en algún momento de la transacción del explosivo, si bien nunca llegó a viajar a Asturias para recoger los explosivos, una operación en la que según los encargados de la investigación participaron 'el Chino', Kounjaa y uno de los hermanos Oulad.

El juicio de extradición de Hilali incumplirá los plazos de la euro-orden

El acusado figura en el sumario de Garzón por supuesta relación con Al-Qaida

ÍÑIGO GURRUCHAGA
CORRESPONSAL. LONDRES

Los abogados y el juez participantes en el juicio de extradición, en Londres, contra Farid Hilali, requerido por la Audiencia Nacional acusado de formar parte de una trama española para cometer los atentados del 11-S en Estados Unidos, compartieron ayer su mutua perplejidad por el incumplimiento de la euro-orden, un acuerdo de países europeos para acelerar los procesos de extradición. Pero el juez Timothy Workman tuvo que aceptar que no cumplirá uno de sus preceptos, que señala que los magistrados del país que recibe la demanda de extradición deben decidirla en un plazo máximo de 60 días.

El juez Baltasar Garzón, que instruye el sumario sobre la supuesta trama española –que incluye en su acusación a Osama Bin Laden–, emitió la euro-orden para la detención de Hilali el 29 de abril. El acusado no fue detenido, aunque estuvo en prisión por otras razones, hasta el 28 de junio. El sospechoso,

de 35 años y nacionalidad marroquí, aparece en el sumario de Garzón como persona vinculada a una célula española de Al-Qaida que habría reclutado miembros, organizado sus viajes a Afganistán y participado en los preparativos del ataque en Estados Unidos.

Ayer se cumplía el plazo máximo de 60 días desde la fecha del arresto y el juez Workman, que esperaba en las primeras vistas cerrar el caso en julio y que aceptó posponerlo hasta septiembre, se resignó a celebrarlo en diciembre. «Es muy difícil cumplir con ese calendario cuando participan buenos abogados», afirmó.

El retraso se debe a dos motivos. La defensa de Hilali, que manifestaba ayer su frustración porque la euro-orden no les permite contestar en un tribunal británico la evidencia, a su juicio ridícula, con la que Garzón sustenta la acusación. Sólo puede defenderla alegando prejuicio racial y político o peligro de torturas en España.

Los abogados de Hilali buscan algún experto español que les ayude. Y, mientras el plazo de la búsqueda se alarga hasta octubre, los abogados encargados de disputar ante la corte –James Lewis, un veterano del 'caso Pinochet', por el Gobierno español, y Ali Bajwa, por Hilali– están muy ocupados. Así, el juicio será en diciembre y el plazo de la euro-orden se incumple.

SINDICATOS POLICIALES

Critican el trato que recibieron los agentes

Varios sindicatos policiales denunciaron ayer el trato que recibieron los agentes interrogados ante la comisión parlamentaria de investigación del 11-M. Por ejemplo, el secretario de Organización del mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, calificó de «cobarde y miserable» la actitud del comisionado del PP Jaime Ignacio Del Burgo con el jefe de Estupefacientes de Avilés durante su comparecencia del pasado martes. El inspector Manuel García salió llorando de la sala.

COMUNIDAD DE MADRID



TRISTEZA. Aguirre consuela a la viuda del 'geo'. / EFE

Medalla para el 'geo' asesinado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entregó ayer a la viuda del 'geo' de la Policía Nacional Francisco Javier Torronteras, que murió en Leganés cuando terroristas islamistas volaron el edificio en el que vivían, la medalla al Mérito Ciudadano de la comunidad, a título póstumo y en categoría de oro.

POLÉMICA

Denuncian la retirada de escolta a Díaz de Mera

El PP denunció ayer en la comisión del 11-M que al europarlamentario popular y ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, se le ha retirado la escolta. El ministro de Interior dijo desconocer si dicha medida se había adoptado, pero se comprometió a, de ser cierta, estudiar los motivos.

El PP, «resignado» a que no se produzcan más citaciones en la comisión del 11-M

M. S.-P. / R. G. COLPISA. MADRID

La comisión de investigación sobre los atentados del 11-M acordó ayer suspender los trabajos y reanudarlos el 7 de septiembre. Ese día decidirá si aprueba nuevas comparecencias o si entra a elaborar las conclusiones. El PP dejó traslucir su escepticismo porque tiene «cierta resignación» a que no habrá oportunidad de escuchar más testimonios.

Los comisionados echaron el cierre sin votos en contra. El PP, sin embargo, dejó constancia de que su voluntad era proseguir los trabajos en agosto, aunque se plegó a la mayoría. El portavoz popular, Vicente Martínez-Pujalte, recordó que su grupo tiene «18 ó 20» comparecencias solicitadas y que no se han celebrado. Entre ellas, las del ex secretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa, los confidentes de las fuerzas de Seguridad, los directores de medios de comunicación y las personas que impulsaron las movilizaciones en la jornada de reflexión previa a las elecciones del 14 de marzo.

El PSOE no es partidario de que hayan más comparecencias, aunque fuentes parlamentarias de este partido apuntaron la posibilidad de que se aprueben las de algunos representantes de las víctimas del 11-M. El presidente de la comisión, Paulino Rivero, insistió en que «no se han dado por cerradas» las citaciones de más personas.